
DOCUMENTO

UN PROYECTO SOCIALISTA PARA EUROPA

Desde el comienzo de la crisis en los años 70, la izquierda ha visto brutalmente sacudidas sus creencias en todo el mundo: algunos de sus valores tradicionales, como la apuesta por el sector público como motor de desarrollo, han quedado en entredicho ante la creciente evidencia de que las empresas públicas no se adaptaban con eficacia a las circunstancias nuevas creadas por la crisis, sin ofrecer, por otra parte, mayores posibilidades al control social de la producción. El resurgir del peligro de guerra mundial, las tensiones Este/Oeste que han marcado los años más recientes, el deterioro de la situación de los países menos desarrollados, su endeudamiento, en buena parte provocado por los problemas de los países centrales, el consiguiente sentimiento de oposición Norte/Sur y, en Europa, la frustración que provoca la lentitud del avance hacia una verdadera unidad política y económica, son factores que enfrentan a la izquierda, y especialmente a la de los países avanzados, con problemas no previstos.

La creciente pérdida de credibilidad del ideal revolucionario, ante los resultados ofrecidos por las grandes revoluciones de este siglo, desde la de 1917 hasta la nicaragüense, ha provocado una pérdida de rumbo estratégico en las fuerzas progresistas, desencantadas también en muchos casos ante los modestos resultados de la experiencia socialdemocrática en Europa, y a menudo desconcertadas ante la aparición de nuevas reivindicaciones sociales ligadas a la conservación del medio ambiente, a la agresión de la mujer, a la falta de perspectivas de los jóvenes, a la lucha por la paz; reivindicaciones, como es obvio, difícilmente traducibles a la vieja teoría de las luchas de clases.

En España, la ideología y la cultura política heredadas de la resistencia anti-franquista por la izquierda se han visto sometidas también, y muy específicamente, a una severa prueba en el curso de la transición democrática, y más aún desde el comienzo en 1982 del gobierno socialista. Los problemas nuevos suscitados por un proceso político inédito —el paso de la dictadura a la democracia por una vía pacífica y reformista— se han entretelado con los problemas comunes

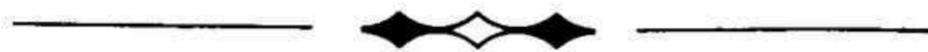
a la izquierda de todos los países europeos occidentales, los problemas derivados del profundo impacto que en la sociedad, la economía y las instituciones políticas de las democracias industriales están teniendo la crisis económica estructural y la subsiguiente revolución tecnológica.

Muchos de los viejos esquemas ideológicos, de las respuestas políticas tradicionales de la izquierda española, han revelado en la práctica su inadecuación a la nueva problemática. Desde el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos locales, así como desde otras instancias políticas y sociales, la izquierda ha debido asumir prácticamente la tarea de reforma y modernización de la sociedad española, esforzándose por conjugar el pragmatismo con la innovación.

La práctica ha ido delante de la teoría. Pero cada vez es más evidente la necesidad de integrar y desarrollar esta práctica en el marco de un nuevo paradigma teórico, de una nueva perspectiva estratégica. En este sentido, la Fundación Pablo Iglesias organizó los días 29 y 30 de noviembre pasados un debate sobre el tema La izquierda y Europa, que pudiese servir como contribución a la satisfacción de esta urgente necesidad.

Esta iniciativa se sitúa además en el contexto del comienzo de una nueva etapa de la democracia española, una etapa caracterizada por la adhesión a la Comunidad Europea, la decisión popular de permanecer en la Alianza Atlántica, y la renovación de la confianza mayoritaria en el PSOE para seguir dirigiendo los destinos del país. En esta nueva etapa la izquierda española tiene la responsabilidad de afinar y profundizar sus respuestas a un conjunto de problemas económicos, sociales y políticos que cada día tienen una dimensión más insoslayablemente europea. De ahí que en la búsqueda de estas respuestas sea aconsejable tomar en cuenta, a la vez que las específicas condiciones españolas, la experiencia acumulada por la izquierda en países pertenecientes, desde hace tiempo, a la Comunidad y a la Alianza. Por ello nuestra invitación a participar en el debate a algunos destacados políticos e intelectuales de diversos países europeos.

Incluimos en estas páginas la última parte de la ponencia que sirvió como marco para la discusión en estas jornadas, Un proyecto socialista para Europa. La Editorial Pablo Iglesias publicará próximamente el libro que recogerá el texto completo de la ponencia, así como los comentarios, intervenciones y debates que allí se suscitaron.



La misma posibilidad de definir un proyecto socialista para Europa resulta aparentemente contradictoria. Por una parte, cuando hablamos de socialismo en Europa lo hacemos proyectando la vieja idea marxiana de que el socialismo es fruto del mismo desarrollo del capitalismo. Europa podría llegar a ser socialista porque es en ella donde más antiguas son las raíces del modo de producción capitalista. Pero a la vez se diría, se dice de hecho, *desde la nueva derecha*, que Europa ha perdido ya la carrera del desarrollo económico frente a los USA, al Japón, a los nuevos países industriales del Pacífico. Europa habría sido la cuna del capitalismo pero no estaría ya en la vanguardia de su progreso histórico.

Tendríamos así una paradoja: el socialismo sólo sería un proyecto creíble en Europa, pero Europa estaría ya condenada por la historia, incapacitada para mantener el ritmo de desarrollo de economías capitalistas más jóvenes. Así, el socialismo habría sido sólo el breve sueño del siglo de la primera revolución industrial europea, entre las revoluciones de 1848 y la segunda guerra mundial, el sueño del tiempo en que Europa fue el centro del sistema mundial. Después el eje del desarrollo capitalista se habría desplazado hacia el Pacífico, y del sueño ya sólo quedaría su herencia: un Estado asistencial ineficiente, una pesada burocracia disfuncional, un intervencionismo torpe y dispendioso.

Más aún: Europa habría entrado en una grave decadencia moral. La falta de voluntad de autodefensa que revela el movimiento pacifista, que más allá de su retórica sólo tendría como objetivo el desarme unilateral, sería el síntoma de una profunda inseguridad, de una pérdida de confianza en los valores democráticos que acompañaron históricamente el ascenso de la Europa capitalista (en una estrecha dialéctica con el mismo ascenso del movimiento obrero, por cierto). El correlato del estancamiento económico, bajo el peso muerto de la burocracia y el intervencionismo, sería entonces la desintegración de la voluntad política de defensa y autoafirmación. Europa, minada por las ideas socialistas, estaría condenada, en un mundo más competitivo que nunca, económica y políticamente.

¿Se pueden plantear hipótesis alternativas? Ciertamente, el auge del pacifismo occidental puede hacer pensar en una pérdida de la voluntad de independencia, de preservación de los valores democráticos, de autoafirmación política. Pero no es obvio que se trate de un proceso colectivo, global, ni sobre todo racional. Podría muy bien ser la respuesta primaria, juvenil, emotiva, ante el clima de inseguridad que se generaliza en Europa y en el mundo occidental desde el renacimiento de la tensión Este/Oeste durante los meses finales de la presidencia de Carter. Es cierto que la extensión del movimiento revela una profunda inseguridad en la conciencia social occidental, pero no es obvio que esta inseguridad revele una decadencia moral. Podría ser la respuesta irracional, pero comprensible, a la situación objetiva en que se encuentra Europa durante la primera presidencia de Reagan: un rehén, cuyos intereses no son prioritarios dentro del agresivo proyecto norteamericano de recuperación de la hegemonía global, pero que sería el primer afectado por cualquier confrontación militar entre los dos bloques.

Ahora bien, el problema es saber si esa situación de Europa occidental como rehén de la política de bloques es irreversible. Si no lo fuera, la *decadencia moral* podría superarse con un proyecto de autoafirmación de Europa en el plano político y de la defensa. Igualmente habría que examinar más de cerca la idea de que Europa ha perdido el tren de la modernización económica. Sabemos que ha perdido terreno, sabemos que su respuesta a la crisis ha sido más lenta, descoordinada, desigual, pero no es evidente que éste sea un retraso irreversible, definitivo.

Quizá pudiera superarse con un proyecto de modernización de la economía de la Comunidad, un proyecto que pasara por la unificación económica y política.

I

Como la viabilidad de cualquier proyecto de autoafirmación europea depende en última instancia de las perspectivas económicas de Europa occidental, puede ser conveniente examinar éstas en primer lugar. Ya se vieron más arriba los grandes rasgos que caracterizan económicamente a la Comunidad. En primer lugar, la fragmentación del mercado y la descoordinación de las políticas nacionales; en segundo lugar, el alto intervencionismo del Estado y la fuerte proporción del PNB que acapara el gasto público, como consecuencia de la existencia de amplios sistemas asistenciales públicos; en tercer lugar, una tendencia a integrar a las economías de la Europa del Este, como semiperiferias —a la manera en que lo fueron las economías de la Europa mediterránea en los años 60—, dentro de un sistema paneuropeo de división internacional del trabajo; en cuarto lugar, una capacidad de integración análoga, aunque menos significativa en el corto plazo, con economías del Sur, y especialmente de América Latina; en quinto lugar, un relativo retraso tecnológico frente a los actuales países punteros, USA y Japón.

¿Es posible diseñar un proyecto de viabilidad para Europa partiendo de estos rasgos? Resulta obvio que algunos de ellos son favorables para el crecimiento económico en condiciones competitivas —la complementariedad casi natural con la Europa del Este, si obviamos las dificultades políticas, las posibilidades en este mismo sentido con América Latina y los países del Sur—, pero que la mayor parte son desfavorables. Quizá sea conveniente distinguir dentro de estos factores, aparentemente negativos, entre factores superables e insuperables *políticamente*. Y para ello puede ser útil analizar la experiencia de los gobiernos conservadores en Europa desde el comienzo de la crisis, con especial hincapié en la Inglaterra de Thatcher.

Como es bien sabido, la ideología neoconservadora sostiene la necesidad de recortar el gasto público para liberar excedente destinado a la inversión. Eso quiere decir recortar los impuestos y dismantelar el Estado asistencial. Igualmente defiende la supresión de todas las trabas que podrían frenar la libre iniciativa empresarial. Eso quiere decir desregular la industria, reduciendo o eliminando la legislación sobre contratación de mano de obra, sobre condiciones de trabajo, sobre protección del medio ambiente. Como lógica consecuencia, se pretende reducir el poder sindical, ya que son los sindicatos los principales defensores de la regulación legal de los contratos y condiciones de trabajo.

Esta ideología neoconservadora debe compararse con la práctica real de los distintos gobiernos conservadores, y puede ser ilustrativo, en particular, relacionar los diferentes resultados de esta práctica en Europa y en los USA. Bajo Reagan, ya se dijo antes, la economía norteamericana ha experimentado una espectacular recuperación, con una fuerte reducción de las cifras de desempleo hasta niveles envidiables desde el punto de vista europeo. La reducción de los programas asistenciales, en perjuicio de los más pobres, ha sido también muy significativa, siguiendo el principio de que la pobreza debe ser combatida favoreciendo el crecimiento, y éste es fruto de la iniciativa individual, no de la pasividad parasitaria que favorecen los programas asistenciales. De hecho, la economía norteamericana ha crecido de forma notable hasta el relativo estancamiento de 1986, pero

la consecuencia ha sido una fuerte polarización de la distribución de la renta: hoy, en USA, los pobres son más pobres y los ricos más ricos.

En la Inglaterra de Thatcher también se ha producido polarización del ingreso, y, tras una fuerte recesión inicial, una recuperación significativa de la actividad industrial. Pero el paro no se ha reducido, y los recortes del Estado asistencial han coincidido con una caída global del nivel de vida. La razón de esta diferencia respecto a los USA se encuentra en la diferente posición de ambos países en el sistema mundial. La recuperación de la economía norteamericana, de hecho, se ha basado en un monstruoso déficit público, siguiendo un modelo vergonzantemente keynesiano de impulso a la demanda a través del rearme. Ese déficit no se ha traducido en inflación gracias a un estricto control monetario, pero lo más notable es que ha sido compatible con un creciente —y ya brutal— déficit comercial gracias a la entrada en USA de capitales especulativos europeos atraídos por los altos tipos de interés.

La revaluación del dólar, el crecimiento en un contexto de brutales desequilibrios, ha sido posible en USA gracias a su posición hegemónica en el sistema mundial. Inglaterra no tiene tal posición, y la aplicación de políticas conceptualmente análogas no ha podido conducir en su caso a una elevación del nivel medio de vida financiado por capitales extranjeros, lo que ha obligado a una política ortodoxa de conservación de los equilibrios. Así, el modelo neoconservador, aplicado en una economía *no hegemónica*, es un tratamiento de choque que conduce a la recuperación tras una dura recesión cuyos efectos negativos no se ven compensados por la reactivación posterior: se trata de una modernización salvaje con altísimos costes sociales.

Pero hay otro hecho aún más significativo en el que es preciso hacer hincapié: en Inglaterra la ofensiva del neoconservadurismo no ha tenido efectos sustanciales en el desmantelamiento del Estado asistencial ni del poder sindical, realidades incomparablemente más presentes en este país que en los USA. Eso no significa que no se haya producido un notable ataque en ambos sentidos: se ha introducido legislación que recorta, por ejemplo, la capacidad de los sindicatos para convocar huelgas sin tener el respaldo mayoritario y secreto de sus bases; el gasto público se ha reducido fuertemente en sectores como la enseñanza. Pero el balance global está muy por debajo de las expectativas que se habían creado en torno a la ideología neoconservadora.

¿Por qué no se ha producido en Inglaterra un verdadero desmantelamiento del Estado asistencial? ¿Por qué, pese a todo, los sindicatos siguen siendo un poder real? La razón hay que buscarla en una tradición política, la europea, que hace inimaginables, en la práctica, acciones políticas como las propugnadas por el conservadurismo más radical. Y a ello hay que añadir que el fracaso comparativo de la experiencia conservadora en Inglaterra, el empobrecimiento real del país frente a la euforia de la economía norteamericana, está acortando cada vez más los horizontes electorales de Thatcher, por lo que es poco pensable que su gobierno vaya a avanzar más allá en cualquiera de estas líneas.

Esto conduce a dos conclusiones: la aplicación radical del proyecto neoconservador en Europa es difícilmente imaginable, en primer lugar, y los resultados económicos del liberalismo salvaje, en segundo lugar, están condenados en Europa a quedar muy por debajo de la recuperación norteamericana, ya que ésta ha

funcionado —mientras ha funcionado— gracias a la hegemonía política y financiera de los USA en el sistema mundial. El modelo conservador, en Europa, no ofrece las mismas posibilidades, y tampoco puede aplicarse hasta el fin, en la línea de recorte del gasto público o desmantelamiento del Estado asistencial, a causa de la cultura política dominante a este lado del Atlántico.

Pero, si volvemos al principio, eso quiere decir que, entre los rasgos condicionantes de las perspectivas económicas de Europa occidental, hay que incluir, entre los políticamente inevitables, la permanencia del Estado asistencial y del intervencionismo. Dicho de otra forma, estos rasgos deben aceptarse como un dato, y de lo que se trata es de ver si, contando con ellos, es posible modificar algunos de los otros rasgos desfavorables, a saber: el retraso tecnológico y la fragmentación y descoordinación de las políticas económicas nacionales. Obviamente la apuesta de fondo es recuperar el terreno perdido frente a otros países y mantener la competitividad con ellos: evitar la decadencia de Europa en el sistema mundial, como condición previa para hacer viable un proyecto socialista europeo.

El razonamiento debe realizarse en dos pasos. El primero se refiere a lo que depende de la voluntad política. Si el acuerdo de principio en torno al Acta Unica se concreta y profundiza, en la década de los 90 Europa puede estar mucho más cerca de la unidad política y contar con un mercado interno unificado y capaz de competir con el norteamericano. Se diría entonces que éste es el primer punto de un proyecto socialista para Europa: *apostar sin reservas ni mezquindades nacionalistas por una verdadera unificación política y económica de la Comunidad*. Esta es una cuestión de voluntad política y en ella se trata de luchar por la mayoría política en Europa de las fuerzas que apuestan por la unidad, fuerzas que hoy se identifican en buena medida con el área socialista, más allá de reservas locales (Gran Bretaña, Grecia), y sin excluir a las fuerzas europeístas de la derecha.

El segundo paso se refiere a la capacidad de renovación industrial y tecnológica, y constituye en realidad una apuesta sobre el paso anterior. ¿Podría una Europa unificada recuperar la distancia perdida respecto a otros países avanzados? En principio existiría un factor positivo nuevo, la coordinación de políticas económicas y la existencia de un mercado interno gigantesco que facilitaría considerablemente la rentabilización de las inversiones de innovación. Ahora bien, ¿sería esto suficiente o el retraso frente al Japón o los USA resultaría ya irrecuperable?

El punto de partida sería, naturalmente, una posición intermedia en la división internacional del trabajo. Europa debería inicialmente importar tecnología de punta, buscar la normalización de sus pautas industriales (mientras se redactan estas líneas se acaba de hacer público un acuerdo para compatibilizar los sistemas de las principales firmas europeas de ordenadores, lo que aumentaría considerablemente sus posibilidades comerciales frente a la IBM norteamericana), recurrir a inversiones extranjeras en los campos en que la superioridad tecnológica de sus competidores fuera abrumadora. Pero en determinadas condiciones ésa podría ser la vía para acortar distancias: históricamente existe la experiencia de *late comers* que han logrado ponerse a la cabeza, y el propio Japón es un excelente ejemplo. La más reciente experiencia española parece confirmar esta hipótesis.

Pero aquí entramos en una cuestión especialmente polémica: ¿son compatibles el Estado asistencial, el intervencionismo público, la regulación burocrático-

legal de las relaciones industriales, con un modelo de crecimiento que permita recuperar la distancia ganada por las economías *liberales*? Hay un ejemplo positivo, el de la recuperación de la economía sueca. Las condiciones para esta recuperación han sido fuertes inversiones posibilitadas por la concertación entre el sindicato, la patronal y el Estado. Pero no es obvio que el caso sueco sea generalizable al conjunto de una economía tan desigual como la de los países que componen la Comunidad.

Ahora bien, hemos señalado ya que tampoco la experiencia neoliberal parece una promesa de éxito seguro. Las limitaciones del caso inglés justifican serias reservas en este sentido, pero incluso el caso norteamericano, irreplicable, como ya hemos dicho, permite sospechar de su futuro: a fin de cuentas el *milagro* de Reagan ha sido hacer pagar el proceso de ajuste de los USA a otros países —Europa y América Latina, especialmente— por la vía monetaria y del déficit. Y ahora, en pleno estancamiento, los USA deben exigir a las restantes economías desarrolladas que relancen su consumo interno para reequilibrar su balanza comercial, víctima de los graves problemas de productividad aún irresueltos de la economía norteamericana.

Podríamos pensar entonces que ninguno de los dos modelos en competencia garantiza la sobrevivencia económica de Europa. Se trataría así de saber cuál es más realista, cuál se ajusta mejor a las condiciones de partida de la Europa real. Y de ver si ese modelo ofrece perspectivas razonables para un proyecto de progreso económico y social hacia el fin de siglo. La respuesta parece razonablemente clara: *sobre la base de la concertación, de la cooperación de los principales agentes sociales, parece posible modernizar las economías europeas siempre que se pueda ofrecer una perspectiva de futuro en la que todos los interlocutores encuentren algo a ganar*. Se trata de superar la perspectiva de la crisis, como un juego de suma nula, y pasar a la perspectiva de una nueva fase de crecimiento en la que todos los agentes se beneficien.

Ahora bien, esa perspectiva de crecimiento solidario implica una cierta constelación de fuerzas económicas y políticas. Sería preciso, de una parte, que existiera una dinámica real, en el capitalismo europeo, que apostara por la unificación del mercado y la autonomía relativa de la economía europea. Hay ciertamente tendencias que se mueven en este sentido, pero no es evidente que sean ni dominantes ni determinantes. Por ello puede resultar decisiva la relación de fuerzas en el plano político, tanto a nivel social como en el Estado: se requiere una iniciativa, y, si fuera posible, una hegemonía socialista capaz de orientar la marcha general, en el terreno económico y político, del conjunto de Europa occidental. Es éste el punto en que, más claramente, el futuro de Europa depende de las distintas políticas nacionales, y, dicho en otras palabras más inmediatas, de la capacidad de la izquierda democrática para hegemonizar el proceso político. Es obvio que para que tal cosa se produzca es preciso concretar cuál será la oferta política socialista. Más adelante se volverá sobre este punto, pero hay algo que se puede adelantar: esa oferta debe basarse en la conservación del Estado asistencial (cualitativamente reformado y mejorado), en la idea de crecimiento solidario, y en la apuesta por la democracia económica. Tal es la apuesta del socialismo español.

Esas son las señas de identidad del socialismo europeo, y no hay razón para abandonarlas, pues tampoco los neoliberales ofrecen panaceas verosímiles. Otra cosa es que debamos sacar las lecciones de la ofensiva neoliberal, y en este aspec-

to será preciso discutir con cierto detalle los problemas de la modernización sindical y de la modernización de la gestión de las empresas y servicios públicos. Pero, en principio, en vez de dejarnos deslumbrar por el espejismo de los USA de Reagan, o por la históricamente irreplicable experiencia japonesa, parece más prudente que los europeos desarrollemos nuestro propio modelo. Reconociendo que en un mundo en cambio el ajuste económico exige flexibilidad, pero sin aceptar que el precio a pagar por esa flexibilidad sean la desregulación y el regreso al capitalismo salvaje.

Conviene insistir aquí, una vez más, en que las ventajas iniciales que han obtenido otras economías, sobre la base de una fuerte polarización de su estructura de distribución de la renta, podrían perderlas en el medio plazo frente a una me-soeconomía fuerte, dinámica, y que tuviera su principal motor en un sólido mercado interno. La crisis de los años 70 no ha sido una crisis de demanda, sino una crisis de oferta, y es así comprensible que los modelos neoliberales de reactivación de la oferta hayan tomado la delantera en la recuperación, sobre todo en el plano de la innovación tecnológica. Pero en una nueva onda de crecimiento volverá a desempeñar un papel fundamental la demanda, y no es verosímil que ni el armamento (como en los USA de los años 80) ni la demanda agregada de los *yuppies* y la vieja clase propietaria puedan ser el motor de un largo crecimiento.

Hay sólidas razones para pensar que el modelo neoliberal, al polarizar el ingreso, ha cavado la tumba de su propio proyecto. La lenta recuperación de las economías europeas, en cambio, podría ser la base de un desarrollo estable y sano, y compatible además con políticas de redistribución, con un modelo de equidad social, con un Estado asistencial eficiente. Una vez más, como en la fábula clásica, podría ser la parsimoniosa tortuga quien ganara la carrera frente a la rápida liebre. Es sólo una apuesta, claro está, pero es una apuesta razonable, y, en todo caso, la única apuesta verosímil para Europa.

II

¿Existe un proyecto de autodefensa para Europa? ¿Es posible superar su actual situación de rehén de la política de bloques, causante a su vez de la inseguridad colectiva que explica el auge del pacifismo unilateralista, la pérdida de confianza en los valores democráticos? Son viejas preguntas, y siempre se ha sabido la primera condición de cualquier respuesta: Europa podrá defenderse por sí misma si está dispuesta a pagar el precio de un sistema de seguridad colectivo y autónomo. En la política exterior norteamericana hay dos tendencias contrapuestas: una de ellas, quizá la dominante, pretende mantener la hegemonía de los USA en el sistema occidental de defensa, y en tal sentido apuesta por el fortalecimiento de la Alianza y por una mayor flexibilidad europea frente a las estrategias de Washington.

Pero hay otra línea, popularizada por Henry Kissinger, según la cual los USA deben volcar sus prioridades hacia el Pacífico, y por tanto sería mejor para todos que Europa pudiera asumir su propia defensa. La real afirmación del pilar europeo de la Alianza, incluso con la existencia de un Saceur europeo, sería la contrapartida de una disminución de la responsabilidad norteamericana, militar y financiera, en la defensa europea, que dejaría las manos libres a los USA para otras áreas más prioritarias en la nueva geopolítica. Además, la mayor autonomía europea obligaría a los países de la Comunidad, pertenecientes o no a la

Alianza, e incluso a los países neutrales, como Suecia, a abandonar su actual mentalidad de *free-riders*, beneficiarios gratuitos de un sistema de seguridad colectiva en el que tienen poca o ninguna responsabilidad.

Planteada así la alternativa, la elección parece clara: si ustedes no quieren ser socios subalternos en problemas de seguridad tienen que estar dispuestos a pagar el precio correspondiente. Y, si no quieren pagarlo, deben aceptar la posibilidad de verse manipulados en función de los intereses estratégicos particulares de los USA, quedando como rehenes en la política de bloques. El *free-rider*, el polizón, tiene que aceptar que él no elige el rumbo del barco al que ha subido sin pagar el billete. En abstracto el razonamiento es bueno, pero si lo concretamos en estos años que vivimos hay razones serias para discutirlo.

La Alianza surgió como una necesidad de la Europa occidental empobrecida e intimidada por la expansión soviética: en aquel momento no había condiciones objetivas para que los europeos crearan un sistema autónomo de defensa, y el tratado de Washington, aunque sirviera a los intereses de los USA, suponía un apoyo muy decisivo a la independencia de la Europa democrática. Pero, tras la distensión de los años 70, la nueva guerra fría de los 80 ha creado una impresión generalizada en Europa de que el principal interés norteamericano en la Alianza es el de contar con unas cartas que jugar en su disputa por la hegemonía global con la Unión Soviética, sin mayor consideración a los intereses de sus socios: ése es el origen de la inseguridad europea, dramáticamente acentuada por el clima de inminente guerra nuclear que, en los primeros años 80, parecía amenazar al (indecorosamente) llamado *teatro europeo*.

En otras palabras: si la Alianza nació respondiendo a una necesidad europea, su actual funcionamiento es interpretado por un amplio sector de la población europea como una imposición y una manipulación de los USA para asegurar sus propios intereses estratégicos a expensas de la seguridad y de la conveniencia de Europa occidental. Un ejemplo muy ilustrativo es el ya citado de la *doble decisión* de desplegar los euromisiles y negociar la reducción de armamento nuclear en Europa: pese a que el origen de la doble decisión fue una demanda europea, y más en concreto de la RFA, para responder al despliegue de los nuevos misiles de alcance intermedio del Pacto de Varsovia, el clima de la primera presidencia Reagan, con su agresiva retórica y su dura diplomacia, tuvo como consecuencia una espectacular inversión del clima social. Hoy hay en la RFA una amplia opinión contraria al mantenimiento de los euromisiles, pues en ellos no se ve una garantía sino un riesgo.

Así, el problema no es simplemente el de una Europa que no quiere asumir sus responsabilidades de defensa, sino también el de un aliado en el que la juventud europea ya no tiene confianza. La política de Reagan, tan eficaz para crear una nueva seguridad, una reafirmación de la identidad de los USA, ha tenido en Europa un efecto completamente opuesto: el de sembrar la inseguridad colectiva, la desconfianza respecto al aliado norteamericano, el derrotismo unilateralista como alternativa al riesgo de una guerra que, desde el punto de vista de muchos europeos, podría venir provocada por la agresividad norteamericana, no por el expansionismo soviético: Y con la llegada al poder de Gorbachov se ha extendido aún más la idea de que la URSS desea la paz mientras los USA buscan la confrontación.

Pero la otra cara de la moneda está también ahí: Europa no puede pretender afirmar su autonomía frente a los USA sin asumir una parte mucho mayor del coste de su propia defensa. La alternativa, es bien sabido, sería la finlandización. El problema es que la tentación de la finlandización, con o sin este nombre, es muy fuerte para un amplio sector de la juventud europea, especialmente en la RFA. Hay varias razones para ello. Una, especialmente paradójica, es la ausencia de experiencia sobre el totalitarismo en la juventud de posguerra: el fascismo es sólo un nombre, especialmente devaluado por su utilización abusiva para designar cualquier actuación conservadora o autoritaria. Otra, decisiva en la RFA, es el sueño de la reunificación y la fuerte realidad de la interrelación entre las dos Alemanias, incluyendo un flujo comercial de la RDA con la Comunidad superior al que mantiene Portugal.

Sin experiencia directa de la vida bajo el totalitarismo, con fuertes intereses y tradiciones comunes con la Europa del Este (la vieja Europa central) sin la que no se comprende la misma cultura europea, y en un momento en que la nueva dirección soviética ofrece un rostro de mayor diálogo, de liberalización y apertura, es bastante comprensible que sean muchos los jóvenes alemanes que prefieran la posibilidad de una Europa neutral, aunque finlandizada, al riesgo de una Europa devastada por la guerra nuclear. Por una guerra, además, en la que la lógica decisiva sería la de la hegemonía mundial norteamericana, no la de la autodefensa europea.

En apariencia, como ya hemos señalado antes, la aceptación de la finlandización de Europa occidental sería el complemento lógico de la resignación ante la subalternidad económica de Europa, como mesoeconomía, en el contexto del sistema mundial. Si Europa no puede competir en términos de igualdad con el Japón o los USA, su mejor apuesta quizá fuera una neutralidad en política exterior cuya otra cara sería la posibilidad de exportar tecnología a los países del Este, integrándolos como semiperiferia en su propia división internacional del trabajo. Pero también se podría pensar en la finlandización como medio para llegar a la competitividad económica.

En efecto, ésa es la experiencia del Japón de la posguerra: habiendo aceptado una dependencia en política exterior de los USA, habiendo renunciado en consecuencia a los gastos de defensa que le habrían correspondido en caso de hacer una política de potencia (como la había hecho hasta Pearl Harbour), Japón logró crecer más rápidamente que los USA, ponerse a la cabeza del desarrollo tecnológico y adquirir una hegemonía económica en el sistema mundial que no habría logrado por la vía político-militar. Quizá ésta fuera también la alternativa para Europa: renunciar a la independencia en política exterior, prescindir de los gastos de defensa y dedicarse a modernizar su economía.

Esta propuesta de egoísmo económico más subalternidad política no es enteramente realista, pues es difícil que un mercado relativamente poco dinámico, como el de los países del Este (más la URSS), permitiera a la Europa occidental crecer competitivamente respecto a los países del centro del sistema. Pero la razón fundamental para decidir sobre su aceptación o rechazo debe ser moral. Europa debe elegir entre su autonomía política y su subalternidad a una gran potencia, o a las dos, en función de sus tradiciones de libertad, democracia e igualdad y solidaridad. Ciertamente, esas tradiciones se han visto deformadas o traicionadas por el imperialismo y el fascismo, pero en ninguna otra parte del mundo han arraigado tanto como en Europa.

Pero, si se rechaza la tentación de la subalternidad, ya sea en su forma actual de dependencia fáctica respecto a los USA dentro de la Alianza, o en su forma hipotética de una futura finlandización, *la única posible alternativa es la asunción por Europa occidental de una parte sustancial de sus gastos y responsabilidades de defensa, superando la idea de transferir los problemas de seguridad a un hermano mayor*. Esto no debe entenderse en el sentido de romper con los USA en cuestiones de seguridad, sino en el mucho más prudente y habitual de fortalecer el llamado pilar europeo de la Alianza, sin romper ésta pero acentuando la autonomía militar y diplomática de Europa occidental respecto al socio norteamericano.

La primera objeción que suele hacerse a este tipo de proyectos es su coste. ¿Puede Europa apostar a la vez por la modernización económica y por la financiación de un sistema (casi) autónomo de seguridad colectiva? La respuesta debe matizarse en función de los guiones históricos que se prevean para la evolución de la coyuntura actual. Si se mantuviera el clima de tensión y rearme que marcó los primeros años 80, ciertamente, la misma idea de un sistema de seguridad europeo supondría una sangría de recursos incompatible con la modernización de la economía. Hay que recordar, en primer lugar, que el déficit presupuestario que ha hecho posible el rearme norteamericano —incluyendo el descabellado presupuesto de la SDI— no sería financiable en Europa, a causa de la posición no hegemónica de las economías europeas en el sistema financiero mundial.

Pero no hay por qué partir de los datos del presente como si fueran inamovibles. Más bien, hay que tomarlos como base para diseñar el propio proyecto. La incompatibilidad entre un clima de tensión y rearme y una política de seguridad europea no debe llevar a concluir la imposibilidad de ésta, sino a definir la política de una posible comunidad europea de defensa como una política de distensión, porque sólo en el marco de la distensión entre los bloques puede afirmarse la identidad europea en cuestiones de seguridad y defensa. Más aún: sólo en un clima pacífico puede escapar la Europa occidental a la tentación de desviar sus mejores recursos económicos hacia el desarrollo de un *arsenal barroco* que, a cambio de una inmediata prosperidad de las industrias ligadas a la defensa, hipotecaría su porvenir tecnológico e industrial.

Esa política de distensión no puede limitarse a la consigna de la *seguridad compartida*, más comprensible en sus intenciones que en su contenido real. No basta (ni se trata, de hecho) con fijar zonas libres de armamento nuclear, o corredores desmilitarizados en la Europa *actual*. Se trata de llegar a una relación distinta entre los bloques, a una relación en la que la mutua desconfianza ya no sea la norma, a una nueva relación en la que sea habitual la información recíproca entre los bloques en cuestiones de seguridad. Se debe aceptar que la llegada al poder de Gorbachov favorece esta apuesta; se trata ahora de saber si Europa puede contribuir a esta tendencia sin abandonar sus valores democráticos, su confianza en la libertad.

El futuro de Europa depende de su capacidad para convertirse en un interlocutor autónomo capaz de matizar los impulsos hegemónicos de los USA sin por ello aceptar la solución trivial de una finlandización, de una subalternidad frente al bloque del Este. Ello exige no sólo una definición exterior *pacifista* de los diferentes Estados europeos, a la manera de las propuestas por el SPD y el Labour Party, sino una opción europea global por la autonomía en cuestiones de seguridad colectiva para la Europa occidental.

Resumiendo: *Europa debe apostar por un mando militar integrado de las fuerzas europeas dentro de la Alianza, lo que sería la base lógica para la existencia de un Saceur europeo; Europa debe buscar la distensión como condición imprescindible para un sistema europeo de seguridad que no suponga su ruina económica; Europa, consiguientemente, necesita tener una única voluntad política, tanto para poder tener una voz clara en la esfera internacional, una voz capaz de imponer sus criterios sobre la necesaria distensión, como para poder medirse con las superpotencias como una fuerza coherente en las disputas de seguridad.* La experiencia de la extraviada marcha de la *doble decisión* es que Europa, en cuestiones de seguridad y diplomacia, no puede perder nunca su propia voz.

III

A lo largo de toda la exposición realizada hasta aquí surge como una constante la necesidad de *voluntad política*: para lograr la unidad económica y política, para que Europa afirme su propia voz, y una voz única, en cuestiones de seguridad. Si los primeros pasos hacia la unidad vinieron impulsados por los mismos intereses del capital, ahora es muy grande para algunos intereses económicos privados la tentación de buscar alternativas fuera de Europa, especialmente en el área del Pacífico. No hay una dinámica económica unívoca que lleve a la unificación, y ésta sólo puede impulsarse de forma resuelta creando una voluntad política continental de unificación.

Parece entonces lógico vincular el proyecto de unidad europea, en estos momentos, con una apuesta por la hegemonía de las fuerzas socialistas. Este es el primer sentido en el que el proyecto de construcción de Europa es un proyecto socialista. Pero esa misma hegemonía socialista, tan lejana hoy, cuando en los principales países europeos gobiernan las fuerzas conservadoras, depende de que el propio proyecto de Europa posea un contenido de progreso, un contenido socialista, de que la promesa de una Europa unida sea el discurso de una sociedad futura capaz de ilusionar a la mayoría social, capaz de crear una nueva hegemonía social y política. Frente al regreso a las esencias pasadas de los USA de Reagan, Europa necesita un proyecto socialista de futuro.

Se ha comenzado a hablar de este proyecto como un Nuevo Contrato, un *New Deal* europeo que tendría dos frentes. El primero sería exterior: la construcción de una Europa autónoma en el plano internacional, que fuera un factor de paz y distensión entre los bloques sin, por otra parte, pretender una imposible equidistancia entre ellos. Una Europa que, aun haciendo tajante su definición por la democracia y la libertad, no fuera un simple aliado subalterno en la Alianza Atlántica, sino un socio con voz propia, capaz de distanciarse de las actuaciones exteriores de los USA cuando su motivo fuera el puro deseo de afirmación hegemónica, pero capaz de hacerlo sin por ello entrar en un proceso de finlandización.

El segundo frente es el tema de este apartado: el contenido *social* del proyecto de una Europa unificada. El punto de partida debería ser obvio por lo ya dicho con anterioridad: Europa no renunciaría al Estado asistencial, ni al ideal de equidad social que ha sido durante un siglo el eje de actuación de la socialdemocracia. Las conquistas en este terreno no serían abandonadas o desmanteladas como ha propugnado la ofensiva neoconservadora, sino que se las reformularía y actuali-

zaría, para superar sus deficiencias, pero en un sentido conducente a su profundización y desarrollo, no a su recorte.

Las formas concretas que debería adoptar un futuro Estado asistencial tendrían que ser fruto de un largo debate social, pero se pueden adelantar ideas que ya están en discusión: la fijación de un ingreso social mínimo para trabajadores y no trabajadores, la reducción de las inercias burocráticas mediante la introducción de mecanismos competitivos en la gestión, completando los servicios públicos estatales con servicios públicos gestionados privadamente y voluntarios. La idea fundamental sería la de buscar una seguridad social, unas garantías de ingreso y atención pública, que no dejaran al ciudadano a merced del azar ni permitieran que el criterio de decisión social fuera la selección natural darwiniana, pero que tampoco reforzaran las tendencias a la inercia, el parasitismo y la pasividad.

Los neoconservadores han subrayado que los mecanismos del Estado asistencial favorecen el abandono de la ética del trabajo. Hay que decir, ante todo, que esta ética puede entenderse como defensa del trabajo creativo, de la autorrealización personal, o como aceptación del yugo de la necesidad más elemental, del «ganarás el pan con el sudor de tu frente». Una sociedad libre debe apoyar el trabajo como actividad creativa, pero no puede aceptar que el riesgo de morir por inanición sea el supremo criterio regulador. Quien no trabaje también deberá comer: otra cosa es que las garantías sociales de sobrevivencia lleguen a ser tan altas que desincentiven el trabajo creativo, pero no cabe hablar de una sociedad civilizada mientras la aceptación de trabajos inhumanos pueda venir impuesta por la lógica social, o mientras la desocupación implique el riesgo inmediato de miseria.

La condición para que se pueda desarrollar un Estado asistencial nuevo, corregido y profundizado, es la misma posibilidad de un crecimiento solidario. La crisis ha impuesto un ajuste, una actualización de las economías europeas frente a las nuevas condiciones de competición en la división internacional del trabajo, que ha supuesto el estancamiento, o el lento crecimiento, de las economías europeas durante una década. Si se acepta la hipótesis de que estamos atravesando la fase B de una onda Kondratiev se puede pensar que la crisis terminará en los años 90, pero sin necesidad de introducir previsiones deterministas también se puede acordar que ha llegado el momento del relanzamiento económico en Europa.

El problema es que ese relanzamiento no sólo depende de factores objetivos. Ciertamente, la primera condición para que se produjera sería aceptar que se ha avanzado sustancialmente en el proceso de ajuste, y que Europa puede crecer de nuevo sin entrar en la espiral de la inflación ni endeudarse externamente al desequilibrar su balanza de pagos. Pero aún si esta situación ya se diera, sería necesario un factor subjetivo (la voluntad política, una vez más) para que el crecimiento fuera algo más que una posibilidad. Europa necesita una voluntad colectiva y solidaria de relanzar su economía, y en este punto surge nuevamente el problema de la orientación política de los gobiernos europeos. Mientras exista una mayoría conservadora en los principales países de Europa no cabe pensar una recuperación económica apoyada en la potenciación del consumo interno, sobre la base de los avances en productividad logrados durante los años de ajuste.

La experiencia de expansión de la demanda interna fracasó en la Francia de 1981, pero podría ser viable en la Europa de los primeros años 90, si existiera voluntad en las principales economías europeas de avanzar por el sendero de la

reactivación. El estancamiento de la economía norteamericana en 1986 podría ser un factor positivo, al provocar una presión sobre los gobiernos conservadores para que relancen sus economías, pero no hay que engañarse: la clave está en el proyecto económico y social de los gobiernos europeos, y sólo una hegemonía de la izquierda europea creará las condiciones políticas para un crecimiento económico solidario en el continente. También aquí la clave del futuro europeo es una apuesta política.

Decir que el futuro de Europa depende de una apuesta política, es decir, que el socialismo y el porvenir europeo están unidos, y eso supone que debemos diseñar una estrategia para el progreso de las fuerzas socialistas en el continente si queremos que éste llegue a tener un futuro. Esta estrategia debe referirse a la posibilidad de lograr el apoyo de las fuerzas sociales necesarias para conquistar una hegemonía duradera en la sociedad civil, y a la posibilidad de hacerlo con un proyecto realista de progreso social y modernización económica. Se puede analizar este proyecto refiriéndonos a los públicos distintos a los que debe dirigirse.

La experiencia de la ofensiva neoconservadora demuestra que la principal apuesta de la izquierda europea, en el plano electoral, es arrebatarse el centro político a la actual hegemonía de la derecha. Pero la reconquista del centro exige la superación de los argumentos sobre los que se ha apoyado el nuevo pluralismo de la derecha. En primer lugar, es preciso reformar radicalmente la empresa pública, introduciendo en su gestión los mismos criterios de eficacia que se esperan —y no siempre se encuentran, sea dicho incidentalmente— en la gestión de la empresa privada; la empresa pública puede ser deficitaria si así lo exige el interés social, pero no puede ser sistemáticamente deficitaria *por el hecho de ser pública*. Hay que acabar para siempre con la identificación entre gestión pública e ineficacia.

En segundo lugar, la izquierda debe lograr que la burocracia del Estado se convierta en un servicio público real y deje de aparecer ante la sociedad como un poder despótico que obstaculiza y frena la actividad de los individuos privados. La burocracia del capitalismo avanzado se nos presenta mucho más próxima a la *jaula de hierro* weberiana que a un cuerpo de asalariados que aplican la voluntad mayoritaria, expresa en forma de leyes, mediante reglas calculables. No se puede entender el alcance social del ataque neoconservador contra el Estado asistencial si se ignora la experiencia desoladora que para la mayor parte de los ciudadanos supone el choque, frecuente o cotidiano, con la prepotencia y la necesidad, corporativamente organizadas, de la burocracia que en teoría debería servirles.

El público afectado por las críticas neoconservadoras contra la empresa pública y la burocracia del Estado asistencial no es necesariamente, en principio, un público conservador, por lo que puede ser aglutinado en un proyecto de progreso que se deslinda netamente de la identificación con ineficacia y despotismo burocrático. Más compleja es la posición de un segundo público, el público tradicional de la izquierda, el movimiento obrero, y en especial su sector organizado sindicalmente. Pues en este caso la propia modernización de la economía, en general asumida por las fuerzas políticas socialdemócratas, socava su fuerza estructural en los sectores en reconversión, a la vez que el discurso ideológico de la izquierda se apoya fuertemente en la identificación entre el movimiento obrero e izquierda política.

Se produce así un doble desencuentro entre la política socialista y el movimiento obrero organizado. Por una parte, el movimiento rechaza, en función de sus intereses corporativos inmediatos, las políticas de modernización económica que destruyen empleo y debilitan a corto plazo al sindicato; consiguientemente se crea una suspicacia frente a quienes dicen proponer en nombre del socialismo dicha modernización. Pero, por otra parte, los partidos socialistas se resisten a las críticas sindicales, viendo en ellas simple miopía corporativista, lo que les lleva a buscar alternativas más modernas al viejo movimiento obrero. Así se produce la idealización de los llamados nuevos movimientos sociales, mientras se tiende a minusvalorar el peso y la componente de progreso del movimiento obrero.

Frente a tales incomprendiones, un proyecto socialista debe reafirmar la centralidad del movimiento obrero. El socialismo pretende una sociedad emancipada gracias al control social de la economía, gracias a la generalización del principio democrático a las relaciones económicas, y éste es el primer sentido que tiene la habitual afirmación de que el socialismo no es sino la extensión y profundización de la democracia. No se puede pensar por ello, simplemente, en un proyecto socialista cuya columna vertebral no sea el movimiento organizado de los trabajadores. Se puede afirmar la necesidad de ampliar el concepto de trabajador, se puede discutir la necesidad de modernizar el movimiento, pero no cabe prescindir de él.

Es necesario, sin embargo, hablar de modernizar el movimiento obrero al menos en dos sentidos. El primero es en cierta forma trivial y viene impuesto por la realidad de la reestructuración económica del capitalismo ante la crisis: ciertos sectores del movimiento obrero, al menos en Europa, están condenados a la desaparición o la reducción sustancial de sus efectivos. Las nuevas tecnologías y los procesos de descentralización de la producción (a veces ligados a la introducción de aquéllas) están creando ya, o van a crear previsiblemente, nuevas capas y sectores de trabajadores, en parte de gran cualificación y en parte descualificados y desprotegidos legalmente (economía sumergida). Más allá de las estrategias que los gobiernos adopten respecto a estas nuevas posiciones laborales, los sindicatos deben elaborar estrategias nuevas para buscar implantación entre ellas, a menos que acepten convertirse en la forma organizativa de unos sectores obreros en trance de extinción.

Pero hay un segundo sentido fundamental en el que es precisa la modernización del movimiento obrero: la experiencia de la crisis ha mostrado que una política sindical de meras reivindicaciones salariales tiene un efecto gravemente contraproducente para los intereses globales del movimiento si se llega a la coyuntura en la que los salarios crecen con tal rapidez que minan las bases de la inversión futura. En tal circunstancia las reivindicaciones salariales sólo pueden provocar desinversión y en última instancia paro. Y no tiene sentido culpar a la lógica capitalista de este proceso: independientemente de la forma en que los capitalistas individuales reaccionen ante la disminución de los fondos disponibles para la inversión, la única forma de evitar el paro es garantizar la inversión futura augurando la existencia de excedente. Este problema es nuevo en la historia del capitalismo. Durante la gran depresión de 1873-90 también fue la caída del excedente el origen de la crisis, pero la raíz del problema parece haber estado más en la competición intercapitalista que en la capacidad reivindicativa del movimiento obrero, aunque éste se beneficiara relativamente del curso de la crisis global. En la crisis de los años 70 hay en cambio una componente indudable de fuerza estructural del trabajo organizado, que finalmente se ha vuelto contra los propios trabajadores

al desencadenar el paro y una cierta hostilidad antisindical en la sociedad civil. No tendría sentido negar la existencia del problema: es preciso definir una estrategia que permita superarlo.

Esta estrategia podría ser la de vincular los salarios a la marcha de la empresa, siguiendo la conocida tesis de Weitzman, del MIT, de relativizar los convenios en función de la rentabilidad. Pero semejante vinculación sólo tendría sentido si se adoptara una estrategia paralela de intervención de los trabajadores en la toma de decisiones y, sobre todo, en la toma de grandes decisiones de producción e inversión, que aún hoy queda normalmente fuera del ámbito de intervención de los trabajadores directos y, lo que es más grave, fuera del ámbito de decisión del conjunto de los sindicatos y de la sociedad. Si hay una línea de avance hacia la democracia económica (hacia el socialismo), ésa es la que pasa por la doble responsabilización de los trabajadores respecto a la marcha de la empresa y de la gestión de ésta respecto a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. Lo demás es retórica.

Un discurso de progreso para Europa debe dirigirse entonces hacia el movimiento obrero, aceptar su centralidad y buscar su modernización para hacer posible que la defensa de los intereses de los trabajadores sea compatible con el crecimiento económico y el avance hacia el socialismo como democracia en la producción. Pero queda un tercer público al que debe dirigirse también un discurso socialista capaz de propulsar un proyecto socialista para Europa. Es un público heterogéneo por su misma definición, pues es el público que integra los nuevos movimientos sociales, o, mejor dicho, es el público que está detrás de la aparición de las *nuevas demandas sociales*, demandas que no se apoyan en el viejo rol del productor que constituye la base del movimiento obrero, sino en los roles complementarios que configuran las posiciones de sujeto en una sociedad industrial avanzada.

Una mujer obrera no es sólo una trabajadora, es también *una mujer* para la que sus roles como esposa y madre son motivo de conflicto y actividad. Un obrero, o un técnico, no son sólo trabajadores asalariados: su vida continúa fuera de la empresa como vecinos de un barrio quizá degradado, consumidores de productos adulterados (o no), potencialmente afectados por la contaminación nuclear. Un joven en paro no es sólo un trabajador potencial, sino también un soldado potencial o un estudiante bloqueado por las limitaciones del sistema educativo, y es posible que le angustie mucho más la posibilidad de morir en una guerra absurda que la realidad de la ausencia de trabajo.

De estos roles no productivos surgen demandas sociales que afectan a la mayor parte de la población aunque tengan una escasa centralidad en el momento de definir las demandas sociales prioritarias. Se ha extendido en años recientes, dentro de la izquierda, un clima de idealización de los nuevos movimientos sociales, para ver en ellos los nuevos portadores del progreso social. Desde un punto de vista más realista habría que aceptar que los nuevos movimientos sociales no son una alternativa al viejo movimiento obrero, que no son la base de partidos políticos capaces de cambiar el mapa parlamentario, que ni siquiera tienen un futuro histórico apreciable, sino que corresponden a una coyuntura histórica determinada.

Pero, aún así, no es posible una izquierda con futuro que se vuelva de espaldas a estas nuevas demandas sociales. Deben ser incorporadas a un proyecto so-

cialista de futuro porque responden a problemas reales y a una sensibilidad social cada vez más amplia, y porque algunas de ellas son coherentes con cualquier proyecto racional de sociedad emancipada. Una sociedad que merezca la pena debe hacer posible la igualdad de oportunidades entre los géneros, debe habitar en un medio pacífico y en equilibrio con la naturaleza.

Durante los años 60 se hizo habitual equiparar crecimiento económico y destrucción de recursos no renovables: la alternativa era una sociedad de crecimiento cero o la destrucción del mundo. La crisis ha creado otro mundo en el que esa alternativa ya no es real. Ahora cabe elegir qué tipo de crecimiento deseamos, y parece obvio que vamos a un crecimiento que consuma menos energía, que no agote los recursos naturales y que permita una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. La izquierda no ha ido nunca históricamente por delante de su tiempo: sólo en los sueños de Marx era pensable la existencia de una vanguardia capaz de prever el futuro y asumir sus exigencias. Pero la izquierda real debe poder asumir los desafíos de su tiempo, y seguramente no es casual que en la izquierda europea se esté difundiendo la evidencia de que la energía nuclear es cara, potencialmente contaminante y peligrosa, y de que por ello puede y debe ser abandonada. Como no es casual que exista un sentimiento general contrario a la escalada de armamentos y a la estrategia de la tensión.

Los nuevos movimientos sociales no son el futuro, como el viejo movimiento obrero no es el pasado. Las críticas de los neoconservadores contra el Estado asistencial y la gestión socialdemócrata no apuntan a un futuro mejor, pero deben ser asimiladas dentro de la experiencia de la izquierda para que ésta recupere la iniciativa. Y el futuro de Europa, la misma viabilidad de Europa, dependen de que la izquierda saque las lecciones del presente y diseñe su propio proyecto de futuro, un proyecto creíble y deseable.
